

LA SINGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO

Por RAÚL CANOSA USERA *

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN.—2. ¿UNA AUTÉNTICA CONSTITUCIÓN?—3. CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LA CONSTITUCIÓN DE 1952.—4. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.—5. CARTA DE DERECHOS.—6. ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES.—7. CONCLUSIÓN.

1. INTRODUCCIÓN

El documento que en este número del Anuario se presenta es la Constitución de Puerto Rico de 1952. Todavía está vigente. Con ella se funda el Estado Libre Asociado (en adelante ELA), Commonwealth en la versión inglesa, y se ensaya un modo de organización política mediante la cual una nación —la puertorriqueña— queda asociada a otra —los Estados Unidos— Además parecía darse por concluida la etapa colonial estadounidense en la isla, tal y como había reclamado el Comité para la Descolonización de las Naciones Unidas.

Como es bien sabido, tras la guerra hispano-americana, Puerto Rico pasó, como botín de guerra, del dominio español a manos norteamericanas, confirmando tal cesión el Tratado de París. Puerto Rico pasa a formar parte del emergente imperio como auténtica colonia regida por un gobernador militar y sin que los puertorriqueños pudieran manifestar su voluntad ni recibieran en un primer momento la ciudadanía estadounidense. El gobierno militar, corroborada su validez por el Tribunal Supremo de la Unión, se mantiene hasta la aprobación en 1900 de la Ley Foraker que introduce un gobierno civil según un modelo ya ensayado por las potencias europeas en sus colonias. Los EEUU se convertían formalmente en potencia colonial, como, se

* Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid. Vicedecano de la Facultad de Derecho.

deducía de sus intenciones al no abrir un proceso que, como aconteció con los nuevos territorios en el siglo XVIII, condujera a la incorporación de Puerto Rico a la Unión como nuevo Estado. En el plano institucional, desde el primer momento se erradicaron las instituciones de estirpe española para sustituirlas por otras de cuño angloamericano. En 1917, la Ley Jones otorga, en contra de los deseos de buena parte de las fuerzas vivas de la isla, la ciudadanía estadounidense a los habitantes de Puerto Rico, pero mantiene en ella un *status* colonial sin que se plantee en rigor su incorporación como Estado de la Unión. Fracasas, por lo demás, los intentos de erradicar la lengua española a pesar de la imposición de la enseñanza obligatoria únicamente en inglés.

Desde el primer momento de ocupación americana hasta la fecha, la legalidad de la presencia estadounidense en la isla ha estado enmarcada por el Tratado de París y por la cláusula 2, de la sección III, del artículo IV de la Constitución federal, según la cual el Congreso federal goza de plena autoridad para decidir sobre la situación de «tierras y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos».

Como precedente inmediato de la Constitución de 1952 se aprueba en 1947 la conocida como Ley del Gobernador electivo que enmendaba la Ley Jones para permitir la elección directa del gobernador de la isla entre sus habitantes dejando de ser ese cargo nombramiento directo de la metrópoli. El presidente de la Federación nombraría, empero al ocupante de un cargo de nueva creación: el Coordinador de las Agencias Federales en la isla. Sin embargo, este cargo nunca se cubrió pues sin tardanza se comienza a fraguar la elaboración de la que luego sería Constitución de 1952.

La Constitución de 1952 entró en vigor después de un largo proceso de elaboración que comenzó en 1950 con la aprobación, en el Congreso, de la Ley 600, mediante la cual se autorizaba a Puerto Rico para que su Asamblea legislativa convocara una Convención constituyente cuyos frutos debían, desde luego, compadecerse con la citada Ley 600 y con la Constitución federal. La Ley 600 dejaba claro que en nada se verían afectadas las relaciones fundamentales entre Puerto Rico y los EEUU. En 1951, la Ley 600 fue ratificada por los puertorriqueños en referéndum. Convocada la Convención, y tras un proceso donde intervinieron como asesores notabilísimos constitucionalistas americanos y extranjeros, aprobó un texto luego ratificado por el electorado de la isla en un segundo referéndum. Remitido el texto al Presidente, éste lo respaldó y lo derivó al Congreso. Fue en el Senado donde se plantearon las mayores objeciones, sobre todo a propósito de la sección 20 del artículo II (derechos sociales y económicos). Esas objeciones se plasmaron en la Ley 447 del Congreso. En esta ley se aprobó la Constitución —elaborada por la Convención y ya ratificada por el pueblo de Puerto Rico— pero se impusieron condiciones: el rechazo de la sección 20 del artículo II (la cláusula social); la exigencia de asegurar la existencia de escuelas privadas (sección 5 del art. II); y el establecimiento de que la reforma de la Constitución no podría hacerse contra la Constitución federal o contra otras normas federales aplicables en Puerto Rico. Las dos últimas condiciones se plasmaban en la imposición de textos que habrían de añadirse a los respectivas sección 5 del artículo II y 3 del artículo VII. Los negociadores puertorriqueños en el Congreso al menos

evitaron que éste impusiera un procedimiento de reforma donde el propio Congreso interviniese, pero no pudieron impedir que se acotara de tan drástica manera al poder de reforma.

La Convención constituyente, mediante la Resolución 34, aprobó las condiciones impuestas por el Congreso, tratando de aprovechar la oportunidad histórica que a Puerto Rico se le ofrecía. El Gobernador proclamó la vigencia de la Constitución el 25 de julio de 1952. El 4 de noviembre la Resolución 34 fue sometida a un nuevo referéndum, el tercero, y ratificada. Lo determinante de la atribución congresional a Puerto Rico de un poder constituyente, aunque limitado, es que la organización del autogobierno en la isla ya no puede ser decidida unilateralmente por el Congreso, puesto que la Constitución sólo puede ser reformada por iniciativa local y con arreglo al procedimiento que la propia Constitución prescribe.

A pesar del avance que sobre la situación anterior supuso, el *status* actual es para casi todos una suerte de semicolonialismo encubierto. Su funcionamiento, sin embargo, apoyado por medidas económicas federales y gestionado por un partido durante gran tiempo hegemónico, el Partido Popular Democrático, permitieron la industrialización de la isla, la erradicación de la pobreza y la extensión paulatina del bienestar. En el plano político, el nacionalismo independentista, vinculado cada vez más con la izquierda, fue perdiendo apoyos electorales hasta quedar convertido en un movimiento residual en lo electoral pero influyente en el plano político y sobre todo cultural.

Transcurridos cuarenta y nueve años desde la entrada en vigor de la Constitución, el ELA parece haberse agotado como esquema de gobierno. Sólo en 1961, una modificación de la Ley de Relaciones Federales, acerca del margen prestatario del ELA, se completó con una reforma de la Constitución. Las demás reformas, en especial durante los años sesenta, son de menor importancia. Las modificaciones de las relaciones entre Puerto Rico y los EEUU se han practicado mediante reformas de normas federales aplicables en Puerto Rico, en especial en la Ley de Relaciones Federales antes citada. Ello demuestra lo modesto del ámbito atribuido al gobierno local que en verdad no afecta a lo esencial de las relaciones entre Puerto Rico y los EEUU.

Todos los partidos políticos locales apuestan, de algún modo, por la superación de la actual situación: los anexionistas o estadoistas (Partido Nuevo Progresista, PNP) porque desean la incorporación plena de la isla como un Estado más de la Unión; los independentistas, porque aspiran a la plena descolonización seguida de la independencia; y los mismos populares (del Partido Popular Democrático cuyo fundador, Muñoz Marín fue el mayor valedor del ELA) quienes desde una posición más ambigua proponen una Unión permanente con los EEUU, pero acrecentando, al mismo tiempo, los poderes locales a través de una fórmula semejante al de la República Asociada.

En varias ocasiones, en algunas por iniciativa del propio Presidente federal, se organizaron comités y se adoptaron iniciativas legislativas en el Congreso. Pero quizás ninguna tan trabada como la que se debatió en el Congreso en 1997. Luego de una declaración del Presidente Bush, padre, y de la petición de los partidos puertorriqueños, el Comité de Recursos de la Cámara de Representantes discutió una proposición de ley mediante la cual se regulaban las condiciones en las que se celebraría un referéndum en Puerto Rico.

Se ofrecía por primera vez a sus habitantes la posibilidad de optar entre la plena incorporación a la Unión como un Estado más, la independencia y el mantenimiento del ELA. Se detallaban las condiciones de la consulta y cuáles serían las consecuencias, tanto par la metrópoli como para su territorio, que cada uno de los tres posibles resultados acarrearía.

Era la primera tentativa seria en el Congreso para resolver la cuestión del *status*, dando la palabra a los puertorriqueños. Se plasmaba el compromiso firme del Congreso —y esto era lo más importante— de respetar la voluntad de los habitantes de la isla. Se fijaban, en su caso, los plazos para la transformación de Puerto Rico en Estado o en República independiente y se dejaba la puerta a la República asociada, pero una vez convertida la isla en República plenamente independiente.

En el sensible punto de la lengua —en Puerto Rico se habla abrumadoramente el español en la vida cotidiana— se resaltaba la necesidad de ampliar el uso del inglés en el caso de la incorporación.

En este proyecto —el conocido como proyecto Young— queda clara la naturaleza dependiente del ELA, tal y como lo describe su sección 4 del capítulo A: un territorio no incorporado bajo la directa administración del Congreso. Aún así, para el caso de que los electores prefirieran el ELA, el proyecto preveía consultas periódicas autorizadas por el Congreso que incluyeran la autodeterminación de la isla. Se llega, pues, al meollo del proyecto: el reconocimiento de este derecho a la autodeterminación de los puertorriqueños y a la posibilidad de seguir optando en el futuro. El proyecto no prosperó y se frustró ese histórico reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

Con un panorama de división partidista no es extraño que en los últimos cuarenta y nueve años el Congreso de los EEUU, a cuyo cargo está decidir sobre el destino político de Puerto Rico, no haya convocado ningún referéndum sobre el asunto. Han sido las Autoridades del ELA las que han convocado los llamados *referenda* criollos cuyo resultado en nada vincula al Congreso Federal. En todas esas consultas la opción ganadora fue el ELA, pero en el decisivo de 1993 no alcanzó la mayoría de los votos. En el último, celebrado en 1998, el resultado fue atípico ya que la opción ganadora fue: «ninguna de las anteriores». Este resultado refleja la desorientación de los puertorriqueños, con su clase política a la cabeza, además del innegable buen humor que, pese a sus circunstancias, caracteriza a este pueblo.

El anexionismo no ha prendido, pues, mayoritariamente en los puertorriqueños a pesar de que el partido defensor de esta posición haya gobernado en varias ocasiones. Acaso los puertorriqueños estén persuadidos de que con la plena incorporación peligraría su cultura hispana, aunque ya muy impregnada por la influencia estadounidense. Tampoco, sin embargo, los isleños apuestan por la plena independencia, deseosos, a pesar de todo, de la ayuda estadounidense que consideran, muchos, imprescindible para su prosperidad. Y en verdad el nivel de vida en Puerto Rico es muy superior al de cualquier país iberoamericano. El apoyo federal no ha sido gratis desde luego: Desde siempre la isla ha sido una magnífica base militar (ahora incluso está allí instalado el Comando sur, luego de desalojar Panamá) y la célebre isla de Vieques es el mejor lugar de entrenamiento para la Marina de los EEUU. Y lo más importante, los puertorriqueños han participado y siguen participando en

todas las guerras libradas por su metrópoli. Su peculiar *status* político no ha salvado a los puertorriqueños de cumplir los más exigentes deberes ciudadanos.

2. ¿UNA AUTÉNTICA CONSTITUCIÓN?

¿En dónde radica la singularidad constitucional de Puerto Rico? Esencialmente, en las limitaciones a la soberanía isleña derivadas de su vinculación a los EEUU, como demuestra la ratificación en el Congreso de los EEUU de la Constitución que comentamos, incluso exigiendo alguna modificación. El pueblo de Puerto Rico se dota en 1952 de una Constitución, pero lo hace en el marco de su unión con el gigante del norte y bajo supervisión del Congreso. Este contexto se refleja en el Preámbulo de la propia Constitución y en su artículo I, sección 1. El texto es deliberadamente ambiguo y, según se mire, contradictorio puesto que, por un lado presenta a la Constitución como expresión de la libre voluntad del pueblo de Puerto Rico «en el ejercicio de nuestro derecho natural», pero —añade— «dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América (Preámbulo). Por otro lado, la sección 1, artículo I, establece que el poder político del ELA «emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad», pero, claro está «dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América». Por último, la sección 2 del artículo I contiene una mención expresa a la soberanía de Puerto Rico que no se compadece con la realidad en la medida en la cual su ejercicio viene enmarcado por la voluntad del Congreso en cuya formación los puertorriqueños residentes en la isla no participan.

Las contradicciones apuntadas alimentan las críticas que equiparan la Constitución a una carta colonial. Además el sistema, al funcionar, ha desvelado esas contradicciones y lo más importante sin género de dudas, ha quedado meridianamente claro que la voluntad del Congreso condiciona la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Éste sólo es dueño del contenido de su Constitución, pero las competencias asumidas por el gobierno local son modestas, al retener la Federación todas las importantes.

Durante el proceso de elaboración de la Constitución nunca fue puesta en discusión la pertenencia de la isla a los EEUU ni el mantenimiento de tal dominio. Era un dato previo inobjetable: la metrópoli no abría a los puertorriqueños la puerta de la independencia —cosa que sólo preanunció el fracasado proyecto Young— a pesar de que durante épocas pasadas hubo movimientos nacionalistas de importancia. La decisión se atuvo a ejercer un discreto poder «constituyente», limitado en lo material por el dato previo del dominio americano y del reducido ámbito de competencias dispuesto, y en lo formal por la necesaria ratificación de la Constitución por el Congreso (Sección 9, artículo IX). No puede cabalmente hablarse, a nuestro juicio, de un auténtico poder constituyente ni, por tanto, de un pleno ejercicio de la soberanía puesto que tanto material como formalmente tal ejercicio estaba radicalmente limitado. Más bien estaríamos ante algo parecido a esa ejercicio de la soberanía limitada de la que gozan los Estados de la Unión. Sin embargo los Estados participaron y participan como tales Estados en la vida política de la

Unión (voto presidencial, representación en el Congreso). Esta participación está vedada a Puerto Rico que no es territorio incorporado. Los Estados de la Unión compensan las limitaciones a su soberanía con la participación activa en la soberanía de la Unión.

El convenio entre los EEUU y el pueblo de Puerto Rico, que menciona el artículo I, sección 1, no existió nunca y vino a ser configurado, creado en suma, por la Constitución de 1952, aunque dejando aspectos importantes sin clarificar. En puridad, el punto de partida era la situación colonial en la que vivía sumido Puerto Rico, sometido a un gobierno hasta 1947 directamente nombrado por la metrópoli; esta situación sin duda se revierte pero sin ofrecer a los puertorriqueños la opción de pronunciarse ni por la independencia ni por la plena incorporación como un Estado más de la Unión. Los EEUU no deseaban en modo alguno desprenderse de la isla ni verla convertida en Estado; y como arreglo autorizaron el ejercicio de una suerte de autonomía isleña sin reconocer a Puerto Rico derechos plenos de ciudadanía (voto presidencial, representación en el Congreso). La metrópoli autorizó la creación de instituciones representativas criollas, pero reservándose la competencia de la competencia y todos los poderes vitales que retiene (defensa, política exterior, comercio exterior y muchos otros).

Por otro lado, la Constitución de 1952 no se ocupa de las relaciones entre las autoridades federales y el ELA con lo cual queda al albur de la voluntad federal que siempre se ha hecho sentir cuando ha sido menester con la plena superioridad de la potencia dominante a través, en particular, de la Ley de Relaciones Federales. En resumidas cuentas, el sedicente convenio entre ambas naciones ha estado siempre desequilibrado (como se infiere del proyecto Young), pues sus términos han sido interpretados por la Federación. Hay en el preámbulo de la Constitución de 1952 apoyaturas explícitas a la interpretación de la supremacía federal: «la ciudadanía de los EEUU», la «lealtad a los postulados de la Constitución federal» y el deseo de que en Puerto Rico convivan «las dos grandes culturas del hemisferio americano». Sin entrar ahora en la polémica acerca del valor normativo del preámbulo, no hay duda de que sus afirmaciones son base hermenéutica determinante para la comprensión de todo el sistema político de Puerto Rico.

En el plano formal, la singularidad más relevante, ya anticipada, radica en el procedimiento de elaboración y aprobación de la Constitución. Comienza con una ley del Congreso (la Ley 600) y termina en puridad con otra (la Ley 447) que impuso modificaciones y condiciones a las que prestó asentimiento la Convención constituyente. No había duda de quién tenía la última palabra sobre el destino político puertorriqueño. La manera en la que se elaboró y aprobó la Constitución exigía paralelamente una especialísima regulación del procedimiento de reforma, a la fuerza vinculado también, cuando se desee activarlo, a la supervisión federal. Aun sin establecerse una intervención formal, es claro que la Federación protagoniza un decisivo control de las reformas. Además, la Carta de Puerto Rico expresamente recoge límites materiales a la reforma cuando establece que cualquier enmienda o revisión «deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos y con la Ley de Relaciones Federa-

les con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso» (Artículo VII, sección 3). En otras palabras, con todas estas normas ha de compadecerse la Constitución de 1952, y cualquiera de sus posibles reformas habrá de respetarlas. Implícitamente se colige que la Federación podrá de algún modo comprobar si se han respetado los límites de la reforma. Se trata, en suma, de un conjunto de límites materiales explícitos, y externos, indisponibles para el poder de reforma como lo fueron para el poder constituyente. El Presidente y el Congreso federal son quienes pueden verificar si tales límites se cumplen. Todo lo anterior es consecuencia de tratarse de una Constitución en cierto modo impuesta.

3. CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LA CONSTITUCIÓN DE 1952

Es una Constitución rígida, pues abundan los límites tanto formales como materiales. De los límites materiales explícitos y externos ya hemos hablado en el epígrafe anterior. Internamente, ninguna cláusula de la Constitución es intocable —salvo la forma republicana de gobierno y la carta de derechos— pero, según sea su alcance, habrá de seguirse alguno de los dos procedimientos reglados, ambos muy intrincados; en los dos es la Asamblea legislativa quien dispone de la iniciativa que se formalizará con el respaldo de las dos terceras partes de cada Cámara. Toda proposición de enmienda será sometida a referéndum especial, aunque la Asamblea, si así lo deciden no menos de las tres cuartas partes de cada Cámara, podrá acordar que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente. Además, cada proposición de enmienda habrá de votarse por separado y no cabrá proponer más de tres enmiendas en un mismo referéndum.

Si el procedimiento descrito ya es sumamente rígido, el regulado en la sección 2 del artículo VII bordea la intangibilidad. Se requiere que la propuesta de la Asamblea legislativa, aprobada por las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, sobre la conveniencia de convocar una Convención constituyente, sea ratificada por los electores en un referéndum a celebrar junto con la elección general. Ratificada la propuesta serán elegidos, según establezca la ley, los miembros de la Convención. La revisión aprobada por la Convención será sometida a referéndum especial, es decir, no simultáneo a la elección general.

De agotarse el segundo procedimiento estaríamos ante un nueva Constitución. Por eso la dificultad de procedimientos está plenamente justificada: el primero para reformar la Carta, con las limitaciones en el número de enmiendas que pueden proponerse en un solo referéndum; el segundo, para la revisión —sustitución— de la Constitución sin que los límites numéricos jueguen entonces. Tanto sobre el procedimiento de reforma como sobre el de la revisión pesan los límites materiales internos (forma republicana de gobierno y carta de derechos) y externos (normas federales). Lo que se proscribe no es la reforma de las partes de la Constitución que se ocupan de la forma de gobierno o de los derechos, sino su abolición. Al menos no hay exigencia expresa de que el texto reformado sea ratificado por el Congreso federal.

La estructura de la Constitución de 1952 es similar a la de los EEUU: se emplea la técnica de artículos largos divididos en secciones. Hay desde luego

una carta de derechos inserta en el cuerpo de la Constitución, al principio (art. II). A continuación se regulan el Poder legislativo (art. III); el Ejecutivo (art. IV) y el Poder Judicial (art. V). El art. VI, «Disposiciones Generales», es una miscelánea donde se encajan diversos asuntos. El artículo VII se dedica a la reforma y a la revisión. El artículo VIII es puramente electoral y complemento del artículo III; regula con minuciosidad las circunscripciones electorales para la elección de representantes y senadores. Por último, el artículo IX contiene las disposiciones transitorias. Por lo general, la regulación de las materias es adecuada sin adoptar un tono reglamentista, salvo en lo atinente al establecimiento de las circunscripciones electorales.

A pesar de todo, se trata de una Constitución más bien breve con dos partes bien delimitadas: la dogmática —principios y derechos— abarcaría los artículos I y II; y la parte orgánica conformada por el resto de la Constitución. No hay en la parte orgánica, como acontece con frecuencia en otras leyes fundamentales —entre ellas la española—, principios, quedando así perfectamente deslindadas ambas partes del texto. Presenta éste una arquitectura diáfana fruto de una buena técnica legislativa, ceñida a la estricta regulación de lo materialmente constitucional. En ocasiones, sin embargo, las remisiones a la ley parecen prematuras y bien pudiera haberse regulado aquello remitido.

4. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

La Constitución de 1952 es muy parca cuando establece principios, todos los regulados se concentran en unas pocas secciones: la 1 y la 2 del artículo I y la 1 del artículo II. Mucho más expresivo resulta el preámbulo que trasluce la inspiración iusnaturalista de la Constitución cuando se invoca el derecho natural del pueblo de Puerto Rico a decidir su propio destino político, optando por el sistema de gobierno democrático en su interpretación estado-unidense. Con una terminología también iusnaturalista se invocan en el preámbulo los derechos del hombre. Sin embargo ese derecho natural que sería el de autodeterminación no se ejerció a pesar de la literalidad del texto constitucional (Vease otra vez el proyecto Young).

El articulado de la Carta es, en cambio, muy parco y acaso sea esta parquedad defecto si, como es sabido, la proclamación constitucional de los principios acaba determinando la interpretación de las reglas constitucionales y del resto del ordenamiento aunque, como tales, los principios carezcan de eficacia directa, esto es, no puedan por sí solos, resolver casos concretos. Las condiciones en las que la Carta fue elaborada y el conservadurismo del Congreso encargado de visarlas explican esas carencias.

Veamos ahora cuáles son los principios expresos en el texto de la Constitución. El artículo I, sección 1, proclama la emanación popular del poder político del ELA, como corrobora la sección 2 del mismo artículo al invocar expresamente la soberanía del pueblo de Puerto Rico, al que están subordinados, se afirma, los tres poderes del Estado. Es verdad, empero, que los poderes del Estado se ejercerán, establece la citada sección, «dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados

Unidos de América». Habría que añadir —subrayamos nosotros— que también se ejercerá conforme a lo dispuesto en la misma Constitución. La fórmula política regulada parece en la forma aproximarse a la de la República asociada que en uso de su soberanía conviene con otra potencia soberana algún tipo de acuerdo. Sin embargo, como ya expusimos antes (y certifica el proyecto Young) tal convenio en realidad no existe pues nunca Puerto Rico ha suscrito con los EEUU convenio alguno sino que más bien se trata de un paulatino proceso de descolonización, dentro del cual la Constitución de 1952 no es más que una concesión del Congreso. Puerto Rico sigue, con su margen de autogobierno, siendo un territorio no incorporado bajo la supervisión del Congreso (cláusula 2, sección III, art. IV de la Constitución de los EEUU) y esta situación de dependencia ha sido confirmada por los tribunales federales. No hay, en puridad, bilateralidad sino muy modesta; se trata más bien de unilateralidad de la metrópoli.

Otro principio atañe a la forma de gobierno que es la republicana (sección 2, art. I) desarrollada mimetizando la fórmula estadounidense. Una separación de poderes de corte presidencialista reproduce el esquema de los Estados de la Unión, al punto de que el cabeza del Ejecutivo puertorriqueño se denomina Gobernador y no Presidente.

Implícito pero muy claro encontramos el principio de democracia representativa (sección 2, art. II) apoyada en referencias expresas a los partidos políticos (sección 6, art. IX). La proclamación del sufragio universal (sección 2, art. I) corrobora el carácter democrático de la Constitución. En resumidas cuentas, el perfil democrático del ELA se asemeja al de su metrópoli, si bien con más realce constitucional del papel de los partidos políticos cuya estructura y funcionamiento no es del todo equiparable a la de los partidos americanos.

No hay en la Constitución de Puerto Rico proclamación solemne del Estado social. Sólo la sección 20 del artículo II, objeto de tantas críticas en el Congreso y suprimida a sus instancias, se refiere a una «más justa distribución» de los beneficios del desarrollo económico entre todos los puertorriqueños. Esta cláusula centró las críticas del Congreso, de composición entonces muy conservadora, que negó la aprobación de la sección 20. Bastó, pues, la voluntad congresional para eliminar la citada sección. La eliminación fue, a su vez, aprobada por la Convención constituyente (Resolución 34) y ratificada por el electorado de la isla en el tercer referéndum al que, durante el proceso constituyente, fueron convocados. La ausencia de proclamaciones solemnes no ha impedido a Puerto Rico alcanzar cotas de justicia social mucho mayores que allí donde, en Iberoamérica, ha sido proclamado constitucionalmente el Estado social sin que las enfáticas normas hayan propiciado verdaderos avances en la distribución de la riqueza. Además, ya en 1952, se incluye una referencia, moderna para 1952, a los recursos naturales, lugares históricos y artísticos (sección 19, art. VI).

5. CARTA DE DERECHOS

En este punto la Constitución de 1952 es muy contenida y no cae en los excesos del constitucionalismo iberoamericano. Se reconocen como auténti-

cos derechos los verdaderamente protegidos que coinciden con las libertades clásicas. Comienza el artículo II con una sección que proclama la «dignidad e igualdad del ser humano». La igualdad ante la ley no se proclama sólo a favor de los ciudadanos —como establece el artículo 14 de la constitución española— sino del ser humano en línea con la inspiración iusnaturalista de la Constitución. A continuación, el artículo II va proclamando los derechos de sufragio (sección 2), la libertad de culto (sección 3), la libertad de palabra, prensa y de reunión (sección 4), el derecho de asociación (sección 6), el derecho a la vida, la libertad la propiedad y el debido proceso (sección 7), el derecho al honor y a la intimidad (sección 8), la justa compensación en caso de expropiación (sección 9), la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones (sección 10), los derechos procesales (sección 12), el habeas corpus (sección 13), la prohibición de títulos de nobleza (sección 14).

A estos derechos clásicos, y con idéntico rango, se suman algunos derechos sociales: el de educación (sección 5), el derecho de sindicación y el de huelga (sección 18). En definitiva, sólo el derecho a la educación es derecho económico social de prestación que vincule de forma inmediata a los poderes públicos. La sección 20 (suprimida por imposición federal) proclamaba numerosos derechos sociales de prestación (el de instrucción primaria y secundaria, al trabajo, el derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado, derecho a la vivienda, al empleo, a la asistencia social de jubilados e incapacitados, derechos del niño). Esta proclamación se hacía depender del desarrollo progresivo de la economía de Puerto Rico. Su eficacia normativa se aproximaba a la de los principios y derechos proclamados en el capítulo tercero, título I de la Constitución española. Hay que decir, en honor a la verdad, que todos esos derechos tienen en Puerto Rico una satisfacción desigual, pero notable en su conjunto.

Una cláusula de la Constitución inserta en el artículo II, la sección 19, se refiere a la «Interpretación liberal de los derechos del ser humano» y deja claro que la enumeración de derechos «no se entenderá de forma restrictiva ni supone exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia» facultando a la Asamblea legislativa para que, llegado el caso, los promueva.

Otro punto interesante de la Constitución comentada es su proscripción de la pena de muerte (sección 7, art. II), consecuencia de una estricta proclamación del derecho a la vida. La prohibición ha planteado recientemente un interesante caso de imposición de la pena de muerte por uno de los tribunales federales que funcionan en Puerto Rico. En la medida en la que el Derecho federal aplicable en Puerto Rico castiga con la máxima pena algunos delitos, su aplicación resultaría inconstitucional, pero en este supuesto prevalece la norma federal, suprema ley de la Nación.

6. ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES

Como se anticipó, el sistema de gobierno regulado es el típicamente presidencialista en su fórmula más pura. La Constitución se ocupa casi en exclusiva de los tres poderes clásicos: legislativo (art. III, sección 4 del art. VI y art. VIII), ejecutivo (art. IV) y judicial (art. V).

La más extensa regulación se la lleva la Asamblea legislativa, bicameral, compuesta por el Senado y la Cámara de Representantes (sección 1, art. III). Todos sus miembros elegidos por votación directa en cada elección popular según un complicado sistema electoral que la Constitución regula pormenorizadamente (sección 4, art. VI) incluso detallando las circunscripciones electorales (art. VIII). Llama la atención la salvaguardia de la representación de los partidos de minoría a la que se asegura una presencia en las Cámaras (sección 7, art. III). De esta suerte, el partido independentista está presente en la Asamblea, pues sin esa cláusula correría el riesgo de convertirse en fuerza política extraparlamentaria.

El Gobernador es la cabeza del ejecutivo y es elegido por los electores junto con el Comisionado Residente en Washington. Figura esta última, por cierto que no se menciona en la Constitución pero que posee gran raigambre y relevancia pues también es elegido por los electores para cumplir funciones de representación y enlace ante la Federación (tiene voz pero no voto en el Congreso federal). El Gobernador disfruta de poderes equiparables a los de un gobernador de un Estado de la Unión en el marco de un sistema presidencialista. La personalización del poder ejecutivo, ligado al liderazgo en su partido, hacen de esta figura la clave de la política puertorriqueña. A ello contribuye la ausencia constitucional de cualquier limitación del número de mandatos (cuya duración es de cuatro años) lo cual permite la reelección indefinida.

Los jueces del poder judicial son nombrados por el Gobernador con el consentimiento del Senado, pero sólo los del Tribunal supremo son en principio vitalicios; el resto permanecerán en sus cargos según establezcan las leyes. Todos los jueces, como el resto de los cargos públicos, podrá ser objeto de juicio político (juicio de residencia, sección 21, art. III).

El Tribunal Supremo culmina la organización judicial de Puerto Rico que coexiste en la isla con la jurisdicción federal. Sin embargo los jueces federales también son ya puertorriqueños aunque, claro está, escogidos y nombrados por la Federación.

7. CONCLUSIÓN

A pesar de suponer un considerable avance sobre la descarnada situación colonial anterior a su aprobación, la Constitución de 1952 no resuelve de una vez por todas la situación de la isla. Como se colegía del proyecto Young, Puerto Rico aún no ha ejercido su derecho a la autodeterminación para decidir con plena soberanía, respetada por los EEUU, qué lazos mantener con su metrópoli o bien optar por la independencia. Ni desde Puerto Rico se ha lanzado una opción clara y mayoritaria —lo demuestran los resultados de los *referenda* de 1993 y 1998— ni en el Congreso federal han cuajado iniciativas para zanjar la cuestión. La isla sigue en el actual estado semicolonial, sufriendo la aplicación de normas en cuyo proceso de elaboración y aprobación los puertorriqueños residentes en la isla no han participado (aunque sí los puertorriqueños residentes en los EEUU quienes pueden ejercer todos los derechos políticos, vedados a sus compatriotas residentes en la isla). Los ha-

bitantes de Puerto Rico dependen, en suma, de las decisiones de unas autoridades —las federales— que ellos no han elegido. La situación se halla bloqueada y no parece probable, hoy por hoy, que los puertorriqueños acuerden por una mayoría significativa solicitar a los EEUU o la anexión o la independencia o la República asociada. En esta tesitura, sin iniciativas puertorriqueñas unívocas, el Congreso de los EEUU opta por lo más fácil: mantener la situación actual de la isla como territorio no incorporado y bajo la directa autoridad del Congreso. La administración senatorial de algunas provincias romanas parece, tanto tiempo después, reproducirse en un pequeño territorio del nuevo imperio.

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO *

Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América.

Al así hacerlo, declaramos:

Que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña.

Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas.

Que consideramos factores determinantes de nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la Constitución federal; la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano; el afán por la educación, la fe en la justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica; la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos; y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios.

ARTÍCULO I

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO

Sección 1.—Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su poder político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América.

Sección 2.—El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico.

* NOTA A LA PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN: *Se presenta el texto íntegro original aprobado por la Convención constituyente y ratificado en referéndum por el pueblo de Puerto Rico. Los asteriscos al lado de algunas secciones indican, como a pie de página se señala, que tales secciones fueron suprimidas, completadas o reformadas. Todas estas modificaciones fueron ratificadas en referéndum.*

Sección 3.—La autoridad política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción.

Sección 4.—La sede de gobierno será la ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico.

ARTÍCULO II

CARTA DE DERECHOS

Sección 1.—La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.

Sección 2.—Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.

Sección 3.—No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado.

Sección 4.—No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.

Sección 5.—Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para protección y bienestar de la niñez*.

Sección 6.—Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares.

* Por la Resolución número 34, aprobada por la Convención Constituyente y ratificada en el referéndum celebrado el 4 de noviembre de 1952, se agregó al final de la Sección 5 del artículo II lo siguiente:

«La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales».

Sección 7.—Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.

Sección 8.—Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.

Sección 9.—No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma prevista por ley. No se aprobará ley alguna autorizando a expropiar imprentas, maquinarias o material dedicados a publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde se encuentren instaladas sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad públicas mediante procedimientos que fijará la Ley, y sólo podrán tomarse antes de la declaración judicial, cuando se provea para la publicación un local adecuado en el cual pueda instalarse y continuar operando por un tiempo razonable.

Sección 10.—No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica.

Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.

Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisibile en los tribunales.

Sección 11.—En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve.

Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.

Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.

La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda.

Sección 12.—No existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia condena-

toria. No se impondrán castigos crueles e inusitados. La suspensión de los derechos civiles incluyendo el derecho al sufragio cesará al cumplirse la pena impuesta.

No se aprobarán leyes *ex post ipso* ni proyectos para condenar sin celebración de juicio.

Sección 13.—El auto de habeas corpus será concedido con rapidez y libre de costas. No se suspenderá el privilegio del auto de hábeas corpus a no ser que, en casos de rebelión, insurrección o invasión, así lo requiera la seguridad pública. Sólo la asamblea Legislativa tendrá el poder de suspender el privilegio del auto de hábeas corpus y las leyes que regulan su concesión.

La autoridad militar estará siempre subordinada a la autoridad civil.

Sección 14.—No se conferirán títulos de nobleza ni otras dignidades hereditarias. Ningún funcionario o empleado del Estado Libre Asociado aceptará regalos, donativos, condecoraciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero sin previa autorización de la Asamblea Legislativa.

Sección 15.—No se permitirá el empleo de menores de catorce años en cualquier ocupación perjudicial a la salud o la moral, o que de alguna manera amenace la vida o la integridad física.

No se permitirá el ingreso de un menor de dieciséis años en una cárcel o presidio.

Sección 16.—Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley.

Sección 17.—Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar.

Sección 18.—A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán, en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales.

Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando están claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales.

Sección 19.—La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.

* **Sección 20.**—El Estado Libre Asociado reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos humanos:

El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria.

El derecho de toda persona a obtener trabajo.

El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física.

El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño, a recibir cuidados y ayudas especiales.

Los derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al desarrollo progresivo de la economía del Estado Libre Asociado y precisan, para su plena efectividad, suficiencia de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial que no ha alcanzado la comunidad puertorriqueña.

En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el gobierno de Puerto Rico se esforzarán por promover la mayor expansión posible de su sistema productivo, asegurar la más justa distribución de sus resultados económicos, y lograr el mejor entendimiento entre la iniciativa individual y la cooperación colectiva. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tendrán presente este deber y considerarán las leyes que tiendan a cumplirlo en la manera más favorable posible.

ARTÍCULO III

DEL PODER LEGISLATIVO

Sección 1.—El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea legislativa, que se compondrá de dos Cámaras —el Senado y la Cámara de Representantes— cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general.

Sección 2.—El Senado se compondrá de veintisiete Senadores y la Cámara de Representantes de cincuenta y un Representantes, excepto cuando dicha composición resultare aumentada a virtud de lo que dispone en la Sección 7 de este artículo.

Sección 3.—Para los fines de la elección de los miembros a la Asamblea Legislativa, Puerto Rico estará dividido en ocho distritos senatoriales y en cuarenta distritos representativos. Cada distrito senatorial elegirá dos Senadores y cada distrito representativo un Representante.

Se elegirán además once Senadores y once Representantes por Acumulación. Ningún elector podrá votar por más de un candidato a Senador por Acumulación ni por más de un candidato a Representante por Acumulación.

Sección 4.—En las primeras y siguientes elecciones bajo esta Constitución regirá la división en distritos senatoriales y representativos que aparece en el artículo VIII. Dicha división será revisada después de cada censo decenal a partir del año

* Por la Resolución número 34, aprobada por la Convención Constituyente y ratificada en el referéndum celebrado el 4 de noviembre de 1952, fue eliminada la Sección 20 del artículo II.

1960, por una Junta que estará compuesta del Juez Presidente del Tribunal Supremo como Presidente y de dos miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los dos miembros adicionales no podrán pertenecer a un mismo partido político. Cualquier revisión mantendrá el número de distritos senatoriales y representativos aquí creados, los cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y se organizarán, hasta donde sea posible, sobre la base de población y medios de comunicación. Cada distrito senatorial incluirá siempre cinco distritos representativos.

La Junta adoptará sus acuerdos por mayoría y sus determinaciones regirán para las elecciones generales que se celebren después de cada revisión. La Junta quedará disuelta después de practicada cada revisión.

Sección 5.—Ninguna persona podrá ser miembro de la Asamblea Legislativa a menos que sepa leer y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico y haya residido en Puerto Rico por lo menos durante los dos años precedentes a la fecha de la elección o nombramiento. Tampoco podrán ser miembros del Senado las personas que no hayan cumplido treinta años de edad, ni podrán ser miembros de la Cámara de Representantes las que no hayan cumplido veinticinco años de edad.

Sección 6.—Para ser electo o nombrado Senador o Representante por un distrito será requisito haber residido en el mismo durante no menos de un año con anterioridad a su elección o nombramiento. Cuando hubiere más de un distrito representativo en un municipio, se cumplirá este requisito con la residencia en el municipio.

Sección 7.—Cuando en una elección general resultaren electos más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera de las cámaras por un solo partido o bajo una sola candidatura, según ambos términos se definan por ley, se aumentará el número de sus miembros en los siguientes casos:

a) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido menos de dos terceras partes del total de los votos emitidos para el cargo de Gobernador, se aumentará el número de miembros del Senado o de la cámara de Representantes o de ambos Cuerpos, según fuere el caso, declarándose electos candidatos del partido o partidos de minoría en número suficiente hasta que la totalidad de los miembros del partido o partidos de minoría alcance el número de nueve en el Senado y de diecisiete en la Cámara de Representantes. Cuando hubiere más de un partido de minoría, la elección adicional de candidatos se hará en la proporción que guarde el número de votos emitidos para el cargo de Gobernador por cada uno de dichos partidos con el voto que para el cargo de Gobernador depositaron en total esos partidos de minoría.

Cuando uno o más partidos de minoría hubiese obtenido una representación en proporción igual o mayor a la proporción de votos alcanzada por su candidato a Gobernador, no participará en la elección adicional de candidatos hasta tanto se hubiese completado la representación que le correspondiese bajo estas disposiciones, a cada uno de los otros partidos de minoría.

b) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido más de dos terceras partes del total de los votos emitidos para el cargo de Gobernador, y uno o más partidos de minoría no eligieron el número de miembros que les correspondía en el Senado o en la Cámara de Representantes o en ambos cuerpos, según fuere el caso, en

proporción a los votos depositados por cada uno de ellos para el cargo de Gobernador, se declararán electos adicionalmente sus candidatos hasta completar dicha proporción en lo que fuere posible, pero los Senadores de todos los partidos de minoría no serán nunca, bajo esta disposición, más de nueve ni los Representantes más de diecisiete.

Para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de minoría, en cumplimiento de estas disposiciones, se considerarán, en primer término, sus candidatos por acumulación que no hubieren resultado electos en el orden de los votos que hubieren obtenido y, en segundo término sus candidatos de distrito que sin haber resultado electos, hubieren obtenido en sus distritos respectivos la más alta proporción en el número de votos depositados en relación con la proporción de los votos depositados a favor de otros candidatos no electos del mismo partido para un cargo igual en otros distritos.

Los Senadores y Representantes adicionales cuya elección se declare bajo esta sección serán considerados para todos los fines como Senadores o Representantes por Acumulación.

La Asamblea Legislativa adoptará las medidas necesarias para reglamentar estas garantías, y dispondrá la forma de adjudicar las fracciones que resultaren en la aplicación de las reglas contenidas en esta sección, así como el número mínimo de votos que deberá depositar un partido de minoría a favor de su candidato a Gobernador para tener derecho a la representación que en la presente se provee.

*** Sección 8.**—El término del cargo de los Senadores y Representantes comenzará el día 2 de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección general en la cual hayan sido electos. Cuando surja una vacante en el cargo de Senador o Representante por un distrito, antes de los quince meses inmediatamente precedentes a la fecha de la próxima elección general, el Gobernador convocará, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacante, a elección especial en dicho distrito, la cual habrá de celebrarse no más tarde de noventa días después de convocada, y la persona que resulte electa en dicha elección especial ocupará el cargo hasta la expiración del término de su antecesor. Cuando dicha vacante ocurriere en transcurso de una sección legislativa, o cuando la Asamblea Legislativa o el Senado fueren convocados para una fecha anterior a la certificación del resultado de la elección especial, el presidente de la cámara correspondiente nombrará a la persona recomendada por el organismo directivo central del partido a que pertenecía el Senador o Representante cuyo cargo quedó vacante, para que ocupe el

* En el referéndum celebrado conjuntamente con las elecciones generales del 3 de noviembre de 1964 se aprobó una enmienda a la Sección 8 del artículo III de la Constitución, quedando dicha sección redactada como sigue:

«**Sección 8.**—El término del cargo de los Senadores y Representantes comenzará el día 2 de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección general en la cual hayan sido electos. Cuando surja una vacante en el cargo de Senador o Representante por un distrito, dicha vacante se cubrirá según se disponga por ley. Cuando la vacante ocurra en el cargo de un Senador o un Representante por Acumulación, se cubrirá por el Presidente de la Cámara correspondiente, a propuesta del partido político a que pertenecía el Senador o Representante cuyo cargo estuviese vacante, con un candidato seleccionado en la misma forma en que lo fue su antecesor. La vacante de un cargo de Senador o Representante por Acumulación electo como candidato independiente, se cubrirá por elección en todos los distritos».

cargo hasta que se certifique la elección del candidato que resulte electo. Cuando la vacante ocurra dentro de los quince meses anteriores a una elección general, o cuando ocurra en el cargo de un Senador o un Representante por Acumulación, se cubrirá por el presidente de la cámara correspondiente, a propuesta del partido político a que pertenecía el Senador o Representante cuyo cargo estuviese vacante, con un candidato seleccionado en la misma forma en que lo fue su antecesor. La vacante de un cargo de Senador o Representante por Acumulación electo como candidato independiente, se cubrirá por elección en todos los distritos.

Sección 9.—Cada cámara será el único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la validez de las actas y del escrutinio de su elección; elegirá sus funcionarios; adoptará las reglas propias de cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno interno; y con la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone, podrá decretar la expulsión de cualquiera de ellos por las mismas causas que se señalan para autorizar juicios de residencia en la Sección 21 de este artículo. Cada cámara elegirá un presidente de entre sus miembros respectivos.

Sección 10.—La Asamblea Legislativa será un cuerpo con carácter continuo durante el término de su mandato y se reunirá en sesión ordinaria cada año a partir del segundo lunes de enero. La duración de las sesiones ordinarias y los plazos para la radicación y la consideración de proyectos serán descritos por ley. Cuando el Gobernador convoque a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria sólo podrá considerarse en ella los asuntos especificados en la convocatoria o en mensaje especial que el Gobernador le envíe en el curso de la sesión, la cual no podrá extenderse por más de veinte días naturales.

Sección 11.—Las sesiones de las cámaras serán públicas.

Sección 12.—Una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara constituirá quórum, pero un número menor podrá recesar de día en día y tendrá autoridad para compeler la asistencia de los miembros ausentes.

Sección 13.—Las cámaras legislativas se reunirán en el Capitolio de Puerto Rico, y ninguna de ellas podrá suspender sus sesiones por más de tres días consecutivos sin el consentimiento de la otra.

Sección 14.—Ningún miembro de la Asamblea Legislativa será arrestado mientras esté en sesión la cámara de la cual forme parte, ni durante los quince días anteriores o siguientes a cualquier sesión, excepto por traición, delito grave, o alteración de la paz; y todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones.

Sección 15.—Ningún Senador o Representante podrá ser nombrado, durante el término por el cual fue electo o designado, para ocupar en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades, cargo civil alguno creado, o mejorado en su sueldo, durante dicho término. Ninguna persona podrá ocupar cargo en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades y ser al mismo tiempo Senador o Representante. Estas disposiciones no impedirán que un legislador sea designado para desempeñar funciones *ad honorem*.

Sección 16.—La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.

Sección 17.—Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde se harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los del presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo o sección será promulgado en su totalidad tal y como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley.

Sección 18.—Se determinará por ley los asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante resolución conjunta, pero toda resolución conjunta seguirá el mismo trámite que un proyecto de ley.

Sección 19.—Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista.

Sección 20.—Al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne fondos en más de una partida, el Gobernador podrá eliminar una o más partidas o disminuir las mismas, reduciendo al mismo tiempo los totales correspondientes.

Sección 21.—La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia; y al reunirse para tal fin los Sena-

dores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros que componen el Senado, y la sentencia se limitará a la separación del cargo. La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la Ley. Serán causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves, y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. El Juez Presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del Gobernador.

Las cámaras legislativas podrán ventilar procesos de residencia en sus sesiones ordinarias o extraordinarias. Los presidentes de las cámaras a solicitud por escrito de dos terceras partes del número total de los miembros que componen la Cámara de Representantes, deberán convocarlas para entender en tales procesos.

Sección 22.—Habrá un controlador que será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen cada Cámara. El Controlador reunirá los requisitos que se prescriban por ley; desempeñará su cargo por un término de diez años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. El Controlador fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el gobernador.

En el desempeño de sus deberes el controlador estará autorizado para tomar juramentos y declaraciones y para obligar, bajo apercibimiento de desacato, a la comparencia de testigos y a la producción de libro, cartas, documentos, papeles, expedientes, y todos los demás objetos que sean necesarios para un completo conocimiento del asunto bajo investigación.

El Controlador podrá ser separado de su cargo por las causas y medianamente el procedimiento establecido en la sección precedente.

ARTÍCULO IV

DEL PODER EJECUTIVO

Sección 1.—El Poder Ejecutivo se ejercerá por un Gobernador, quien será elegido por voto directo en cada elección general.

Sección 2.—El Gobernador ejercerá su cargo por el término de cuatro años a partir del día 2 de enero del año siguiente al de su elección y hasta que su sucesor sea electo y tome posesión. Residirá en Puerto Rico, en cuya ciudad capital tendrá su despacho.

Sección 3.—Nadie podrá ser Gobernador a menos que, a la fecha de la elección, haya cumplido treinta y cinco años de edad, y sea, y haya sido durante los cinco años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente *bona fide* de Puerto Rico.

Sección 4.—Los deberes, funciones y atribuciones del Gobernador serán:

Cumplir y hacer cumplir las leyes.

Convocar la Asamblea Legislativa o el Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses públicos así lo requieran.

Nombrar, en forma que se disponga por esta Constitución o por ley, a todos los funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado. El Gobernador podrá hacer nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria.

Ser comandante en jefe de la milicia.

Llamar a la milicia y convocar el *posse comitatus* a fin de impedir o suprimir cualquier grave perturbación del orden público, rebelión o invasión.

Proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas. La Asamblea Legislativa deberá inmediatamente reunirse por iniciativa propia para ratificar o revocar la proclama.

Suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, conceder indultos, conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones por delitos cometidos en violación de las leyes de Puerto Rico. Esta facultad no se extiende a procesos de residencia.

Sancionar o desaprobar con arreglo a esta Constitución, las resoluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa.

Presentar a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del Estado y someterle además un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente. Dicho informe contendrá los datos necesarios para la formulación de un programa de legislación.

Ejercer las otras facultades y atribuciones y cumplir los demás deberes que se le señalen por esta Constitución o por ley.

Sección 5.—Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estará asistido de Secretarios de Gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado. El nombramiento del Secretario de Estado requerirá, además, el consejo y consentimiento de la cámara de Representantes, y la persona nombrada deberá reunir los requisitos establecidos en la Sección 3 de este artículo. Los Secretarios de Gobierno constituirán colectivamente un consejo consultivo del Gobernador que se denominará Consejo de Secretarios.

Sección 6.—Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos de gobierno, y para definir sus funciones, se establecen los siguientes: de Estado, de Justicia, de Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y de Obras Públicas. Cada departamento ejecutivo estará a cargo de un Secretario de Gobierno.

Sección 7.—Cuando ocurra una vacante en el cargo de Gobernador producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al Secretario de Estado, quien lo desempeñará por el resto del término y hasta que un nuevo Gobernador sea electo y tome posesión. La ley dispondrá cuál de los Secretarios de Gobierno ocupará el cargo de Gobernador en caso de que simultáneamente quedaren vacantes los cargos de Gobernador y de Secretario de Estado.

Sección 8.—Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter transitorio el Gobernador esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, lo sustituirá, mientras dure el impedimento, el Secretario de Estado. Si por cualquier razón

el Secretario de Estado no pudiere ocupar el cargo, lo ocupará el Secretario de Gobierno que se determine por ley.

Sección 9.—Cuando el Gobernador electo no tomase posesión de su cargo, o habiéndolo hecho ocurra una vacante absoluta en el mismo sin que dicho Gobernador haya nombrado un Secretario de Estado o cuando habiéndolo nombrado éste no haya tomado posesión, la Asamblea Legislativa electa, al reunirse en su primera sesión ordinaria, elegirá por mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara, un Gobernador y éste desempeñará el cargo hasta que su sucesor sea electo en la siguiente elección general y tome posesión.

Sección 10.—El Gobernador podrá ser destituido por las causas y mediante el procedimiento que esta Constitución establece en la Sección 21 del artículo III.

ARTÍCULO V DEL PODER JUDICIAL

Sección 1.—El Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo, y por aquellos tribunales que se establezcan por ley.

Sección 2.—Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. La Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y determinará su competencia y organización.

Sección 3.—El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y cuatro jueces asociados. El número de sus jueces sólo podrá ser variado por ley, a solicitud del propio Tribunal Supremo.

* **Sección 4.**—El Tribunal Supremo funcionará bajo reglas de su propia adopción, en pleno o dividido en salas. Todas las decisiones del Tribunal Supremo se adoptarán por mayoría de sus jueces. Ninguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la Ley.

Sección 5.—El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley.

* En el referéndum celebrado el 8 de noviembre de 1960 se aprobó una enmienda a la Sección 4 del artículo V de la Constitución quedando dicha sección redactada como sigue:

«**Sección 4.**—El Tribunal Supremo funcionará, bajo reglas de su propia adopción, en pleno o dividido en salas compuestas de no menos de tres jueces. Ninguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría de 1 número total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la ley».

Sección 6.—El Tribunal Supremo adoptará para los tribunales, reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menoscaben o modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea legislativa, la cual tendrá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto.

Sección 7.—El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos, y a las otras leyes aplicables en general al gobierno. El juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado.

Sección 8.—Los jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión de sus cargos hasta que sus nombramientos sean confirmados por el Senado y los desempeñarán mientras observen buena conducta. Los términos de los cargos de los demás jueces se fijarán por ley y no podrán ser de menor duración que la prescrita para los cargos de jueces de igual o equivalente categoría existentes en la fecha en que comience a regir esta. Todo lo relativo al nombramiento de los demás funcionarios y de los empleados de los tribunales, se determinará por ley.

Sección 9.—Nadie será nombrado juez del Tribunal Supremo a menos que sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico, haya sido admitido al ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico por lo menos diez años antes del nombramiento y haya residido en Puerto Rico durante los cinco años inmediatamente anteriores al mismo.

Sección 10.—La Asamblea legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro que será obligatorio cuando hubieren cumplido setenta años de edad.

Sección 11.—Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituidos por las causas y mediante el procedimiento que esta constitución establece en la sección 21 del artículo III. Los jueces de los demás tribunales podrán ser destituidos por el Tribunal Supremo por las causas y mediante el procedimiento que se disponga por ley.

Sección 12.—Ningún juez aportará dinero, en forma directa o indirecta, a organizaciones o a partidos políticos, ni desempeñará cargos en la dirección de los mismos o participará en campañas políticas de clase alguna, ni podrá postularse para un cargo público electivo a menos que haya renunciado al de juez por lo menos seis meses antes de su nominación.

Sección 13.—De modificarse o eliminarse por ley un tribunal o una sala o sección del mismo, la persona que en él ocupare un cargo de juez continuará desempeñándolo durante el resto del término por el cual fue nombrado, y ejercerá aquellas funciones judiciales que le asigne el juez Presidente del Tribunal Supremo.

ARTÍCULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1.— La asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función; y podrá autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar general y a crear aquellos que fueren necesarios a tal fin.

Ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá efectividad hasta que sea ratificada, en referéndum, por la mayoría de los electores capacitados que participen en el mismo en cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse. La forma del referéndum se determinará por ley que deberá incluir aquellos procedimientos aplicables de la legislación electoral vigente a la fecha de la aprobación de la ley.

* **Sección 2.**—El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios, se

* En el referéndum celebrado el 10 de diciembre de 1961 se aprobó una enmienda a la Sección 2 del artículo VI de la Constitución, quedando dicha Sección redactada como sigue:

«**Sección 2.**—El poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa y nunca será rendido o suspendido. El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para contraer y autorizar deudas se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, pero ninguna obligación directa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por dinero tomado a préstamo directamente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico evidenciada mediante bonos o pagarés para el pago de la cual la buena fe. El crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fueren empeñados será emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico si el total de (i) el monto del principal de e intereses sobre dichos bonos y pagarés. Junto con el monto del principal de e intereses sobre la totalidad de tales bonos y pagarés hasta entonces emitidos por el Estado Libre Asociado y en circulación pagaderos en cualquier acto económico y (ii) cualesquiera cantidades pagadas por el Estado Libre Asociado en el año económico inmediatamente anterior al año económico corriente en concepto de principal e intereses correspondientes a cualesquiera obligaciones evidenciadas mediante bonos o pagarés garantizadas por el Estado Libre Asociado. Excediere el 15 por 100 del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado e ingresadas en el Tesoro de Puerto Rico en los dos años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente; y ninguno de dichos bonos o pagarés emitidos por el Estado Libre Asociado para cualquier fin que no fuere facilidades de vivienda vencerá con posterioridad a un término de 30 años desde la fecha de su emisión y ningún bono o pagaré emitido para fines de vivienda vencerá con posterioridad a un término de 40 años desde la fecha de su emisión; y el Estado Libre Asociado no garantizará obligación alguna evidenciada mediante bonos o pagarés si el total de la cantidad pagadera en cualquier año económico en concepto de principal e intereses sobre la totalidad de las antes referidas obligaciones directas hasta entonces emitidas por el Estado Libre Asociado y en circulación y las cantidades a que se hace referencia en la cláusula (ii) excediere el 15 por ciento del promedio del monto total de dichas rentas anuales.

ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa y nunca será rendido o suspendido. El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para contraer y autorizar deudas se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa.

Sección 3.— Las reglas para imponer contribuciones serán uniformes en Puerto Rico.

Sección 4.— Las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine la Asamblea Legislativa. En dichas elecciones serán elegidos el Gobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y los demás funcionarios cuya elección en esa fecha se disponga por ley.

* Será elector toda persona que haya cumplido veintiún años de edad, y reúna los demás requisitos que se determine por ley. Nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no poseer propiedad.

Se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas.

Todo funcionario de elección popular será elegido por voto directo y se declarará electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo.

Sección 5.— Las leyes deberán ser promulgadas conforme al procedimiento que se prescriba por ley y contendrán sus propios términos de vigencia.

Sección 6.— Cuando a la terminación de un año económico no se hubieren aprobado las asignaciones necesarias para los gastos ordinarios de funcionamiento del gobierno y para el pago de intereses y amortización de la deuda pública durante el siguiente año económico, continuarán rigiendo las partidas consignadas en las últimas leyes aprobadas para los mismos fines y propósitos en todo lo que fueren aplicables, y el Gobernador autorizará los desembolsos necesarios a tales fines hasta que se aprueben las asignaciones correspondientes.

La Asamblea Legislativa fijará límites para la emisión de obligaciones directas por cualquier municipio de Puerto Rico por dinero tomado a préstamo directamente por dicho municipio evidenciadas mediante bonos o pagarés para el pago de las cuales la buena fe. El crédito y el poder para imponer contribuciones de dicho municipio fueren empeñados; disponiéndose, sin embargo, que ninguno de dichos bonos o pagarés será emitido por municipio alguno en una cantidad que, junto con el monto de la totalidad de tales bonos y pagarés hasta entonces emitidos por dicho municipio y en circulación exceda el por ciento determinado por la Asamblea Legislativa, el cual no será menor del cinco por ciento (5 por 100) ni mayor del diez por ciento (10 por 100) del valor total de la tasación de la propiedad situada en dicho municipio.

El Secretario de Hacienda podrá ser requerido para que destine los recursos disponibles incluyendo sobrantes al pago de los intereses sobre la deuda pública y la amortización de la misma en cualquier caso al cual fuere aplicable la Sección 8 de este artículo VI mediante demanda incoada por cualquier tenedor de bonos o pagarés emitidos en evidencia de la misma».

* En el referéndum celebrado el 1 de noviembre de 1970 se aprobó una enmienda a la tercera oración de la Sección 4 del artículo VI, quedando dicha oración redactada como sigue:

«Será elector toda persona que haya cumplido dieciocho años de edad, y reúna los demás requisitos que se determine por ley».

Sección 7.—Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones.

Sección 8.— Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.

Sección 9.— Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.

Sección 10.—Ninguna ley concederá compensación adicional a un funcionario, empleado, agente o contratista por servicios al gobierno, después que los servicios hayan sido prestados o después que se haya formalizado el contrato. Ninguna ley prorrogará el término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento. Ninguna persona podrá recibir sueldo por más de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico.

Sección 11.—Los sueldos del Gobernador, de los Secretarios de Gobierno, de los miembros de la Asamblea Legislativa, del Controlador y de los Jueces se fijarán por ley especial y, con excepción del sueldo de los miembros de la Asamblea Legislativa, no podrán ser disminuidos durante el término para el cual fueron electos o nombrados. Los del Gobernador y el Controlador no podrán ser aumentados durante dicho término. Ningún aumento en los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa tendrá efectividad hasta vencido el término de la Asamblea Legislativa que lo apruebe. Cualquier reducción de los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa sólo tendrá efectividad durante el término de la asamblea Legislativa que la apruebe.

Sección 12.—Los edificios y propiedades pertenecientes al Estado Libre Asociado que hasta ahora han sido usados y ocupados por el Gobernador como Jefe Ejecutivo, y aquellos que usare y ocupare en la misma capacidad, no devengarán rentas.

Sección 13.— El procedimiento para otorgar franquicias, derechos, privilegios y concesiones de carácter público o cuasi público será determinado por ley, pero toda concesión de esta índole a una persona o entidad privada deberá ser aprobada por el Gobernador o por el funcionario ejecutivo en quien él delegue. Toda franquicia, derecho, privilegio o concesión de carácter público o cuasi público estará sujeta a enmienda, alteración o revocación según se determine por ley.

Sección 14.—Ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquéllos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación; y el dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarse a la agricultura estarán limitados, por su carta constitutiva, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta disposición se entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una

corporación agrícola que tenga interés de ningún género en otra corporación de igual índole.

Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos, con garantías sobre bienes raíces y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero deberán disponer de dichos bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber recibido el título de propiedad de los mismos.

Las corporaciones que no se hayan organizado en Puerto Rico, pero que hagan negocios en Puerto Rico, estarán obligadas a incumplir lo dispuesto en esta sección, hasta donde sea aplicable.

Estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o el manejo de terrenos en exceso de quinientos acres por el Estado Libre Asociado y sus agencias o instrumentalidades.

Sección 15.— La Asamblea Legislativa determinará todo lo concerniente a la Bandera, el Escudo y el Himno del Estado Libre Asociado. Una vez así establecidos, cualquier ley que los cambie no comenzará a regir hasta un año después de celebradas las elecciones generales siguientes a la fecha de la aprobación de dicha ley.

Sección 16.— Todos los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado, sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas prestarán, antes de asumir las funciones de sus cargos, juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de América ya la Constitución ya las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Sección 17.— En casos de invasión, rebelión, epidemia o cualesquiera otros que provoquen un estado de emergencia, el Gobernador podrá convocar a la Asamblea Legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan su asiento las cámaras, siempre con sujeción a la aprobación o desaprobación de la Asamblea Legislativa. Así mismo podrá ordenar el traslado e instalación provisional del Gobierno, con sus agencias, instrumentalidades y organismos fuera de la sede del gobierno, por el tiempo que dure la emergencia.

Sección 18.— Toda acción criminal en los tribunales del Estado Libre Asociado se instruirá a nombre y por autoridad de «El Pueblo de Puerto Rico» mientras otra cosa no se dispusiere por ley.

Sección 19.— Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad; la conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico por la Asamblea Legislativa; reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.

ARTÍCULO VII

DE LAS ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN

Sección 1.—La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara. Toda proposición de enmienda se someterá a los electores capacitados en referéndum especial, pero la Asamblea Legislativa podrá siempre que la resolución concurrente se apruebe por no menos de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara, disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente. Cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente y en ningún caso se podrá someter más de tres proposiciones de enmienda en un mismo referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios términos de vigencia y formará parte de esta Constitución si es ratificada por el voto de la mayoría de los electores que voten sobre el particular. Aprobada una proposición de enmienda deberá publicarse con tres meses de antelación, por lo menos, a la fecha del referéndum.

Sección 2.—La Asamblea Legislativa podrá, mediante resolución concurrente aprobada por dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara, consultar a los electores capacitados si desean que se convoque a una convención constituyente para hacer una revisión de esta Constitución. La consulta se hará mediante referéndum que se celebrará al mismo tiempo que la elección general; y si se deposita a favor de la revisión una mayoría de los votos emitidos sobre el particular, se procederá a la revisión en Convención Constituyente elegida en la forma que se disponga por ley. Toda revisión de esta Constitución deberá someterse a los electores capacitados en referéndum especial para su aprobación o rechazo por mayoría de los votos que se emitan.

Sección 3.—Ninguna enmienda a esta Constitución podrá alterar la forma republicana de gobierno que por ella se establece o abolir su Carta de Derechos*.

ARTÍCULO VIII

DE LOS DISTRITOS SENATORIALES Y DE LOS REPRESENTATIVOS

Sección 1.—Los distritos senatoriales y representativos serán los siguientes:

I.—*Distrito Senatorial de San Juan*, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 1. La Capital de Puerto Rico excluyendo los actuales precintos electorales de Santurce y Río Piedras; 2. Las zonas electorales números 1 y 2 del

* Por la Resolución número 34, aprobada por la Convención Constituyente y ratificada en el referéndum celebrado el 4 de noviembre de 1952, se agregó al final de la Sección 3 del artículo VII lo siguiente: «Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimoprimer, adoptada con el carácter de un convenio».

actual precinto de Santurce; 3. La zona electoral número 3 del actual precinto de Santurce; 4. La zona electoral número 4 del actual precinto de Santurce, y 5. Los barrios Hato Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heights de la Capital de Puerto Rico.

II.—*Distrito Senatorial de Bayamón*, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 6. El municipio de Bayamón; 7. Los municipios de Carolina y Trujillo Alto; 8. El actual precinto electoral de Río Piedras, excluyendo los barrios Hato Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heights de la Capital de Puerto Rico; 9. Los municipios de Cataño, Guaynabo y Toa Baja, y 10. Los municipios de Toa Alta, Corozal y Naranjito.

III.—*Distrito Senatorial de Arecibo*, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 11. Los municipios de Vega Baja, Vega Alta y Dorado; 12. Los municipios de Manatí y Barceloneta; 13. Los municipios de Ciales y Morovis; 14. El municipio de Arecibo, y 15. El municipio de Utuado.

IV.—*Distrito Senatorial de Aguadilla*, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 16. Los municipios de Camuy, Hatillo y Quebradillas; 17. Los municipios de Aguadilla e Isabela; 18. Los municipios de San Sebastián y Moea; 19. Los municipios de Lares, Las Marías y Maricao, y 20. Los municipios de Añasco, Aguada y Rincón.

V.—*Distrito Senatorial de Mayágüez*, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 21. El municipio de Mayágüez; 22. Los municipios de Cabo Rojo, Hormigueros y Lajas; 23. Los municipios de San Germán y Sabana Grande; 24. Los municipios de Yauco y Guánica, y 25. Los municipios de Guayanilla y Peñuelas.

VI.—*Distrito Senatorial de Ponce*, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 26. Los barrios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y la Playa de la ciudad de Ponce, del municipio de Ponce; 27. Todo el municipio de Ponce, exceptuando los barrios, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y la Playa de la ciudad de Ponce; 28. Los municipios de Adjuntas y Jayuya; 29. Los municipios de Juana Díaz, Santa Isabel y Villalba, y 30. Los municipios de Coamo y Orocovis.

VII.—*Distrito Senatorial de Guayama*, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 31. Los municipios de Aibonito, Barranquitas y Comerio; 32. Los municipios de Cayey y Cidra; 33. Los municipios de Caguas y Aguas Buenas; 34. Los municipios de Guayama y Salinas, y 35. Los municipios de Patillas, Maunabo y Arroyo.

VIII.—*Distrito Senatorial de Humacao*, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 36. Los municipios de Humacao y Yabucoa; 37. Los municipios de Juncos, Gurabo y San Lorenzo; 38. Los municipios de Naguabo, Ceiba y Las Piedras; 39. Los municipios de Fajardo, Vieques y la Isla de Culebra, y 40. Los municipios de Río Grande, Loíza y Luquillo.

Sección 2.—Las zonas electorales número 1, 2, 3 y 4 incluidas en tres distritos representativos comprendidos en el distrito senatorial de San Juan, son las mismas actualmente existentes para fines de organización electoral, en el segundo precinto de San Juan.

ARTÍCULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Sección 1.—Al comenzar a regir esta Constitución todas las leyes que no estén en conflicto con la misma continuarán en vigor íntegramente hasta que sean enmendadas o derogadas o hasta que cese su vigencia de acuerdo con sus propias disposiciones. Salvo que otra cosa disponga esta Constitución, la responsabilidad civil y criminal, los derechos, franquicias, concesiones, privilegios, reclamaciones, acciones, causas de acción, contratos y los procesos civiles, criminales y administrativos subsistirán no obstante la vigencia de esta Constitución.

Sección 2.—Todos los funcionarios que ocupen cargos por elección o nombramiento a la fecha en que comience a regir esta Constitución, continuarán en el desempeño de los mismos y continuarán ejerciendo las funciones de sus cargos que no sean incompatibles con esta Constitución, a menos que las funciones de los mismos sean abolidas o hasta tanto sus sucesores sean seleccionados y tomen posesión de acuerdo con esta Constitución y con las leyes aprobadas bajo la autoridad de la misma.

Sección 3.—Independientemente del límite de edad fijado por esta Constitución para el retiro obligatorio, todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén desempeñando sus cargos a la fecha en que comience a regir esta Constitución continuarán como jueces hasta la expiración del término por el cual fueron nombrados y los del Tribunal Supremo continuarán en sus cargos mientras observen buena conducta.

Sección 4.—El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será sucesor de El Pueblo de Puerto Rico a todos los efectos, incluyendo, pero sin que se entienda como una limitación, el cobro y pago de deudas y obligaciones de acuerdo con los términos de las mismas.

Sección 5.—En lo sucesivo la expresión «ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico», sustituirá a la expresión «ciudadano de Puerto Rico» según ésta ha sido usada antes de la vigencia de esta Constitución.

Sección 6.—Los partidos políticos continuarán disfrutando de todos los derechos que les reconozca la ley electoral, siempre que reúnan los requisitos mínimos exigidos para la inscripción de nuevos partidos por la ley vigente al comenzar a regir esta Constitución. La Asamblea Legislativa, cinco años después de estar en vigor la Constitución, podrá cambiar estos requisitos, pero cualquier ley que aumente los mismos, no será efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente ala aprobación de la misma.

Sección 7.—La Asamblea Legislativa podrá aprobar las leyes que fueren necesarias para complementar y hacer efectivas estas disposiciones transitorias a fin de asegurar el funcionamiento del Gobierno, hasta que los funcionarios que en esta Constitución se proveen sean electos o nombrados y tomen posesión de sus cargos, y hasta que esta Constitución adquiera vigencia en todos sus aspectos.

Sección 8.—De crearse un Departamento de Comercio, el departamento denominado de Agricultura y Comercio en esta Constitución, se llamará Departamento de Agricultura.

Sección 9.—La primera elección bajo las disposiciones de esta Constitución se celebrará en la fecha que se disponga por ley, pero no más tarde de seis meses después de la fecha en que comience a regir esta Constitución y la siguiente, se celebrará en el mes de noviembre de 1956, en el día que se determine por ley.

Sección 10.—Esta Constitución comenzará a regir cuando el Gobernador así lo proclame, pero no más tarde de sesenta días después de su ratificación por el Congreso de los Estados Unidos.

Dada en Convención reunida en el Capitolio de Puerto Rico el día seis de febrero del año de Nuestro Señor de mil novecientos cincuenta y dos.

